

REPÚBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL



JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL

PEREIRA - RISARALDA

Doctora:

ANA MARIA URICOECHEA MEJÍA

Abogada Ejecutora de la Administración Judicial

Dirección Seccional Pereira

Carrera 8 No. 42 B - 50

Ciudad

Oficio No. 3958

Noviembre 22 de 2016

Rad. 2016-0610

Me permito NOTIFICARLE que por auto proferido el 23 de septiembre de 2016, dentro del incidente de desacato promovido, mediante apoderada judicial, por la señora SANDRA PIMENTEL MURILLO en contra de BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A., este Juzgado ordenó sancionar al doctor MILTON DAVID MICÁN BELTRÁN en calidad de Presidente y Representante Legal de la entidad accionada, consistentes en multa de cinco (05) salarios mínimos mensuales legales vigentes para ambos, por desacato a la sentencia dictada el 29 de agosto de 2016. Dicho auto fue consultado ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta Ciudad, quien mediante providencia calendada 3 de noviembre de 2016 confirmó dicha sanción y multa.

Por lo anterior, me permito remitirle copia auténtica del auto mediante el cual este Despacho ordenó la sanción y de la providencia del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, en la cual se ordena hacer efectiva la referida sanción.

Cordialmente,

DIANA MARÍA GALVIS MANSO

Secretaria

CMRT

2016-495
se envió x
correo electrónico
falta en físico. ①

74

CONSTANCIA SECRETARIAL: A Despacho del señor Juez, informándole que el término concedido a los representantes legales de la accionada, corrió los días 19, 20 y 21 de septiembre de 2016. En silencio. Pereira, Risaralda, septiembre 22 de 2016.

DIANA MARIA GALVIS MANSO
Secretaria.

REPÚBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL



JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL

Pereira, Risaralda, veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis

Interlocutorio	2145
Referencia:	INCIDENTE DE DESACATO
Proceso:	ACCIÓN DE TUTELA
Radicado:	66001-40-03-001-2016-00610-00
Accionante:	SANDRA PIMENTEL MURILLO
Accionada:	BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A.

Procede el Despacho a resolver el incidente de desacato presentado, mediante apoderada judicial, a continuación de la acción de tutela por la señora SANDRA PIMENTEL MURILLO contra BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A.

ANTECEDENTES.

Mediante escrito que obra a folios (1 y 2) del presente cuaderno, la señora SANDRA PIMENTEL MURILLO, manifestó que la accionada no ha cumplido con el fallo de tutela del 29 de agosto de 2016 emitido por este despacho, perjudicando así nuevamente su derecho fundamental de petición.

Atendiendo lo manifestado por la parte accionante, mediante auto del nueve (9) de septiembre de 2016 (fl.8), se requirió al doctor MILTON DAVID MICÁN BELTRÁN en su calidad de Presidente y Representante Legal de la entidad accionada o a quien hiciera sus veces, para que en el término de dos (2) días se pronunciaran frente a lo expuesto en el escrito de incidente. Dicho lapso transcurrió en silencio.

En virtud de lo anterior, conforme lo preceptúa el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, en providencia del quince (15) de septiembre de 2016 (fl.13), se ordenó la apertura del incidente de desacato, para lo cual se concedió el término de tres (3) días al mismo en aras de que ejerciera su derecho de defensa, proveído que se notificó al día siguiente (fls. 14 y 15). Oportunamente la entidad accionada aportó escrito justificando su incumplimiento al fallo de tutela en la imposibilidad de emitir una respuesta a la accionante sin que les sea allegada una documentación solicitada que solo la accionante puede aportar.

CONSIDERACIONES

COMPETENCIA:

Es competente éste Despacho para adelantar el trámite incidental, por cuanto conoció de la acción de tutela.

EL PROBLEMA JURÍDICO:

En este asunto se debate si es procedente sancionar Presidente y Representante Legal de BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A., por su negativa en dar cumplimiento al fallo de tutela proferido el 29 de agosto de 2016 por este despacho, en el que se dispuso: *"se ordena a BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A. a través de su Presidente y/o Representante Legal el doctor MILTON DAVID MICÁN BELTRÁN o quien haga sus veces, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este proveído, resuelva de fondo, de manera clara, precisa y concreta la solicitud presentada por la accionante el 29 de junio de 2016, aclarando si fue aprobada o negada y además se remita copia de la objeción emitida por esa entidad, precisando la fecha de la misma, toda vez que el 01 de octubre de 2016 no ha acaecido"*.

El Artículo 86 de la Constitución Política establece la finalidad de la acción de tutela, cual es la protección de los derechos fundamentales, mediante una orden, que debe ser cumplida en los términos señalados dentro del fallo, pues se trata de la definición de la situación en forma ágil, de allí que se otorgue para su satisfacción, el término perentorio de 48 horas, es por ello que la decisión deber ser concreta por medio de órdenes que deben cumplirse sin demora, conforme lo estatuye el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991. La tarea del Juez Constitucional no se circunscribe a tramitar incidente de desacato, sino que debe procurar por todos los medios necesarios la efectivización de los derechos fundamentales que resultaron conculcados, razón de suyo suficiente para que el Juez de primera instancia no pierda competencia hasta tanto la orden sea completamente cumplida. En efecto, el Juez Constitucional dispone de la herramienta que consagra el artículo 52 del Decreto 2591/91, norma que a su tenor dice:

"...La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción..."

De esta manera la figura jurídica del desacato se traduce en una medida de carácter coercitivo con que cuenta el juez constitucional, en ejercicio de su potestad disciplinaria, para sancionar con arresto y

145
3

multa, a quien desatienda las órdenes o resoluciones judiciales que se han expedido para hacer efectiva la protección de derechos fundamentales, a favor de quien o quienes han solicitado su amparo, posibilidad dentro de la cual, en observancia del debido proceso, debe establecerse objetivamente que la sentencia no se ha cumplido, o se ha satisfecho de forma parcial, procediendo de ser el caso, a imponer la sanción que corresponda, con el fin de restaurar la orden constitucional quebrantada. Ese es el objeto del procedimiento incidental, por ello, no se puede volver sobre juicios o valoraciones hechas dentro del proceso de tutela, lo que implicaría revivir un proceso concluido afectando de esa manera la institución de la cosa juzgada.

En sentencia C-367 de 2014 M.P.: Mauricio González Cuervo, la Corte Constitucional señaló:

“...4.2. El deber de acatar las providencias judiciales y los poderes del juez para hacerlas cumplir. Reiteración de jurisprudencia.

4.2.1. *Cumplir con las providencias judiciales es un imperativo del Estado Social y Democrático de Derecho. El derecho a acceder a la justicia implica, para ser real y efectivo, al menos tres obligaciones, a saber: (i) la obligación de no hacer del Estado (deber de respeto del derecho), en el sentido de abstenerse de adoptar medidas que tengan por resultado impedir o dificultar el acceso a la justicia o su realización y de evitar tomar medidas discriminatorias respecto de este acceso; (ii) la obligación de hacer del Estado (deber de protección del derecho), en el sentido de adoptar medidas para impedir que terceros interfieran u obstaculicen el acceso a la administración de justicia del titular del derecho; y (iii) la obligación de hacer del Estado (deber de realización del derecho), en el sentido de facilitar las condiciones para el disfrute del derecho y hacer efectivo su goce.*

4.2.1.1. *El acceso a la justicia no se agota en la posibilidad de acudir ante la administración de justicia para plantear un problema jurídico, ni en su resolución, sino que implica, también, que “se cumpla de manera efectiva lo ordenado por el operador jurídico y se restablezcan los derechos lesionados”. Dada la relevancia del cumplimiento de las providencias judiciales para el derecho fundamental de acceder a la justicia, en algunas oportunidades este tribunal lo ha amparado, de manera excepcional, por medio de la acción de tutela, “bajo el entendido de que la administración de justicia, además de expresarse en el respeto a las garantías establecidas en el desarrollo de un proceso, se manifiesta en el hecho de que las decisiones que se tomen dentro del mismo tengan eficacia en el mundo jurídico y que la providencia que pone fin al proceso produzca todos los efectos a los que está destinada...”.*

Así pues, el incidente de desacato es el instrumento que tiene a su alcance una persona a quien se le han protegido sus derechos fundamentales mediante una decisión judicial, para materializar una orden y en consecuencia hacer desaparecer la situación que conculca las prerrogativas protegidas por el juez en sede de tutela.

“Desde esa perspectiva, el incidente de desacato “debe entenderse como un instrumento procesal para garantizar plenamente el derecho

constitucional a la administración de justicia del accionante (art. 229 C.P.), puesto que éste permite la materialización de la decisión emitida en sede de tutela, con lo cual no basta con que se otorgue a las personas la posibilidad de acudir a la tutela y que con ella se protejan sus derechos fundamentales, sino que existan medios que ayuden al cabal cumplimiento de la orden proferida por el juez constitucional¹.
(Subrayas fuera de texto).

DEL CASO CONCRETO

La señora SANDRA PIMENTEL MURILLO, a través de su apoderada judicial, por medio del presente incidente de desacato, manifestó que hasta la fecha la entidad accionada no ha provisto respuesta a su derecho de petición radicado el día 29 de junio del año que avanza, encontrando así vulnerado su derecho fundamental de petición y haciendo caso omiso al fallo tutelar con fecha del 29 de agosto de 2016 emitido por este despacho.

Considera este despacho que la orden dada en el fallo de tutela no es imposible de cumplir, como se alega, porque con la abstracción de la documentación que la accionada dice requerir, puede dar respuesta, en el sentido de aclarar si fue aprobada o negada la solicitud de la accionante y adicionalmente puede remitir la objeción emitida por esa entidad, precisando la fecha de la misma, toda vez que el 01 de octubre de 2016 no ha acaecido.

En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta el desacato al fallo de tutela proferido por este Estrado Judicial se procederá a dar aplicación a las sanciones establecidas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, y en consecuencia, al doctor MILTON DAVID MICÁN BELTRÁN, en su condición de Presidente y Representante Legal de BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A. se le impondrá como sanción por desacato del fallo de tutela, ARRESTO DE UN DÍA (1) y MULTA de CINCO (5) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, equivalentes a la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE (\$3.447.270.00), a favor de la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

Tal como lo consagra el artículo 52 inciso segundo de la normatividad antes indicada, esta decisión se someterá a consulta ante los Juzgados Civiles del Circuito de Pereira, para lo cual, se dispondrá el envío del expediente a la Oficina de Apoyo Judicial de la ciudad.

Sin más consideraciones, el JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA RISARALDA,

¹ Sentencia T-271 de 2015. Magistrado Ponente: JORGE IVÁN PALACIO PALACIO.

Palacio de Justicia. Calle 41 entre carreras 7ª y 8ª Torre A oficina 501 - Tel: 3147745, Fax: 3147743 Correo Electrónico: j01cmpeña@cendoj.ramajudicial.gov.co

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR que el doctor MILTON DAVID MICÁN BELTRÁN, en su condición Presidente y Representante Legal de BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A. ha incurrido en DESACATO por incumplimiento del fallo de tutela proferido por esta célula judicial el 29 de agosto de 2016, dentro de la acción de tutela promovida a través de apoderada judicial, por la señora SANDRA PIMENTEL MURILLO.

SEGUNDO: En consecuencia, se le impone al doctor MILTON DAVID MICÁN BELTRÁN, en su condición Presidente y Representante Legal de BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A, sanción de ARRESTO DE UN DÍA (1) y MULTA de CINCO (5) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, equivalentes a la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE (\$3.447.270.00), a favor de la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

La multa impuesta deberá cancelarse dentro de los tres (03) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, en la cuenta N° 3-0820-000640-8 del Banco Agrario de Pereira, denominada CSJ-MULTAS Y RENDIMIENTOS-CUN. Para acreditar el cumplimiento de la sanción, los interesados deberán remitir a este Juzgado copia del respectivo recibo de consignación de lo contrario se enviará copia del presente proveído y del que resuelva la consulta, a la Oficina Jurídica de la Administración Judicial, para que proceda con el respectivo cobro coactivo.

TERCERO: Se advierte a los sancionados que la orden impartida en el fallo de tutela permanece, razón por la cual deben cumplir con lo dispuesto en el mismo.

CUARTO: Notifíquese a las partes lo aquí resuelto, hecho lo cual se enviará en consulta ante el inmediato Superior Jerárquico; Juzgados Civiles del Circuito de la ciudad (Art. 52 Decreto 2591 de 1991). Remítase por intermedio de la Oficina de Apoyo Judicial.

NOTIFIQUESE,

JUAN DE LA CRUZ CASTAÑO GARCÍA
Juez
CMRT

4
97
36

Incidente de desacato Ras. 2016-0259-01

Juzgado Cuarto Civil del Circuito.

Pereira, Risaralda, noviembre tres de dos mil dieciséis.

Se procede a resolver la consulta del auto proferido por el Juzgado Primero Civil Municipal de esta ciudad, el pasado veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, mediante el cual se impuso sanción por incumplimiento al fallo de tutela al doctor Milton David Micán Beltrán en su calidad de presidente y representante legal de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A.

Antecedentes

Mediante sentencia proferida el veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, el Juzgado de primera instancia, dispuso tutelar el derecho fundamental de petición de la señora Sandra Pimentel Murillo, en consecuencia, ordenó a la accionada le contestara a la accionante el derecho de petición elevado el 29 de junio de 2016, aclarándole si fue aprobada o negada y además, le remitiera copia de la objeción emitida, precisándole la fecha de la misma, toda vez que el 01 de octubre de 2016, ha acaecido.

En escrito allegado el nueve de septiembre hogaño, la accionante por intermedio de su apoderada judicial, presentó solicitud de incidente de desacato ante el Juzgado de conocimiento, toda vez que la accionada no había dado cumplimiento a la orden dada mediante fallo de tutela.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27 del decreto 2591, a través de auto del nueve de septiembre de 2016, el Juzgado Primero Civil Municipal de esta ciudad, dispuso requerir al representante legal de la aseguradora, para que se pronunciara respecto al cumplimiento de lo ordenado en la sentencia.

Frente al requerimiento realizado por el Despacho, la entidad accionada guardó silencio, razón por la que el juez a-quo decidió por auto calendado el quince de septiembre de este año, dar apertura al incidente de desacato y requerir al representante legal de la aseguradora doctor Milton David Micán Beltrán, a quien se le notificó en debida forma dicho requerimiento.

El representante legal de la aseguradora a través de escrito se pronunció para informar que estaban a la espera de una documentación para poder contestarle a la actora.

El juzgado de conocimiento, constató que con la respuesta de la aseguradora, no se daba cumplimiento a lo ordenado en la sentencia, razón por la que el veintitrés de septiembre de este año, decide declarar que el representante legal de dicha entidad incurrió en desacato a la orden de la sentencia, por lo cual

impuso sanción de arresto por un (01) día y multa de cinco (05) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Consideraciones

Esta célula judicial es competente para decidir el grado jurisdiccional de consulta respecto de la sanción que por desacato que impuso el Juzgado Primero Civil Municipal de esta ciudad al representante legal de BBVA Seguros de Vida Colombia, por incurrir en desacato al fallo de tutela del 29 de agosto de 2016.

El despacho anuncia que esta consulta será confirmado, por los siguientes motivos:

En el presente caso se protegió el derecho fundamental de petición de que es titular la señora Sandra Pimentel Murillo, representada por apoderada judicial, sin embargo, la parte accionada no ha cumplido con lo ordenado en la sentencia, por cuanto la abogada de la actora se ha presentado en varias oportunidades a esta segunda instancia para informar que la accionada aún no ha resuelto de fondo su petición.

Entonces, a pesar de varios requerimientos efectuados por el Juzgado de primera instancia, y por este estrado judicial; ha sido en vano la espera que se le ha dado a la aseguradora, pues no ha querido cumplir con lo ordenado en el fallo, o por lo menos no ha explicado que haya tenido algún inconveniente de fuerza mayor para no hacerlo.

Para el asunto tenemos entonces, que el Decreto 2591 de 1991 Reglamenta la acción de tutela y consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política en su artículo 52 que: "La persona que incumpliere una orden de un Juez proferida con base en el presente decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales" (...)

La mencionada norma fija un procedimiento especial para la imposición de una sanción por desacato; el cual se rige por el trámite incidental regulado en los artículos 27 y 52 del decreto arriba citado.

Frente al incumplimiento de la orden dada a través de fallo de tutela, el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 establece el procedimiento a seguir:

Cumplimiento del fallo de tutela:

Proferido el fallo que conceda la tutela, la autoridad responsable del agravio, deberá cumplirla sin demora. Si no lo hiciera dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al superior responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior

346

hasta que cumplan su sentencia. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario en su caso. En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza (Subrayas fuera de texto).

En cuanto a la naturaleza del incidente de desacato ha dicho la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-652 de 2010:

"NATURALEZA DEL INCIDENTE DE DESACATO-Jurisprudencia constitucional En punto a la naturaleza del incidente de desacato, la jurisprudencia de la Corte ha precisado que (i) el fundamento normativo del desacato se halla en los artículos 52 y 27 del Decreto 2591 de 1991; (ii) el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 consagra un trámite incidental especial, el cual concluye con un auto que no es susceptible del recurso de apelación pero que debe ser objeto del grado de jurisdicción de consulta en efecto suspensivo si dicho auto es sancionatorio. Todo lo cual obedece a que la acción de tutela es un trámite especial, preferente y sumario que busca la protección inmediata de los derechos fundamentales; (iii) el incidente de desacato procede a solicitud de parte y se deriva del incumplimiento de una orden proferida por el juez de tutela en los términos en los cuales ha sido establecido por la sentencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada y emana de los poderes disciplinarios del juez constitucional; (iv) el juez que conoce el desacato, en principio, no puede modificar el contenido sustancial de la orden proferida o redefinir los alcances de la protección concedida, salvo que la orden proferida sea de imposible cumplimiento o que se demuestre su absoluta ineficacia para proteger el derecho fundamental amparado, (v) por razones muy excepcionales, el juez que resuelve el incidente de desacato o la consulta, con la finalidad de asegurar la protección efectiva del derecho, puede proferir órdenes adicionales a las originalmente impartidas o introducir ajustes a la orden original, siempre y cuando se respete el alcance de la protección y el principio de la cosa juzgada; (vi) el trámite de incidente de desacato debe respetar las garantías del debido proceso y el derecho de defensa de aquél de quien se afirma ha incurrido en desacato, quien no puede aducir hechos nuevos para sustraerse de su cumplimiento; (vii) el objetivo de la sanción de arresto y multa por desacato es el de lograr la eficacia de las órdenes impartidas por el juez de amparo para la efectiva protección de los derechos fundamentales reclamados por los tutelantes, por lo cual se diferencia de las sanciones penales que pudieran ser impuestas; (viii) el ámbito de acción del juez, definido por la parte resolutive del fallo correspondiente, le obliga a verificar en el incidente de desacato: "(1) a quién estaba dirigida la orden; (2) cuál fue el término otorgado para ejecutarla; (3) y el alcance de la misma. Esto, con el objeto de concluir si el destinatario de la orden la cumplió de forma oportuna y completa (conducta esperada)". De existir el incumplimiento "debe identificar las razones por las cuales se produjo con el fin de establecer las medidas necesarias para proteger efectivamente el derecho y si existió o no responsabilidad subjetiva de la persona obligada".

Es así, como el desacato en tratándose de un fallo de tutela por incumplimiento de la orden por parte de la autoridad pública o la persona particular destinataria de la misma; conducta negativa y rebelde, que el artículo 52 del decreto 2591 de 199, sanciona con arresto hasta de seis meses y multa hasta veinte salarios mínimos mensuales, cuya imposición corresponde al mismo juez que profirió el fallo de tutela.

Es evidente en el presente asunto, que a pesar de haber transcurrido un término más que prudencial, BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., no ha cumplido con lo ordenado en la sentencia, esa conducta

desplegada por esa entidad, es inconstitucional de los derechos fundamentales invocados por la actora, como también va en contravía de la administración de justicia; pues el cumplimiento a la orden en la sentencia de tutela, es fundamental para salvaguardar los derechos protegidos.

En conclusión, y sin más consideraciones, encuentra este Despacho que el señor Milton David Micán Beltrán, en su calidad de representante legal de BBVA Seguros de Vida Colombia, incurrió en desacato al fallo de tutela del 29 de agosto de 2016, y sigue incurriendo en desacato; razón por la que esta célula judicial confirmará la presente sanción y arresto.

Decisión

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito De Pereira, Risaralda,

Resuelve

Primero: Confirmar el auto proferido el veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis por el Juzgado Primero Civil Municipal de la ciudad, dentro del incidente de desacato, promovido por la señora Sandra Pimentel Murillo representada por abogada en contra de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., representada por el señor Milton David Micán Beltrán.

Segundo: Ordenar el envío de la actuación al señor Juez de Conocimiento para lo de rigor.

Notifíquese


Martha Isabel Dueque Arias
Juez

JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA

AUTENTICACIÓN

La anterior reproducción mecánica obrante en cinco (5) folios, es fiel copia de su original que he tenido a la vista previo su respectivo cotejo, que reposan dentro del INCIDENTE DE DESACATO donde es accionante SANDRA PIMENTEL MURILLO y accionada BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A., radicado N° 2016-00610. Con la constancia que son las primeras copias que se expiden y prestan merito ejecutivo.

Para constancia se firma en Pereira, el día veintitrés (23) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).

DIANA MARÍA GALVIS MANSO

Secretaria